



Junta General
del Principado de Asturias

XII LEGISLATURA SESIÓN DEL PLENO NÚMERO 40 (27 de mayo de 2025)

ASUNTO NÚMERO 16

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias IU-Más País-IAS sobre reducción de la jornada laboral (12/0178/0280/15354)

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 20 de mayo de 2025. La iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, serie B, número 437, de 21 de mayo de 2025).

El Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias IU-Más País-IAS, a través de su portavoz, Javier González Vegas, al amparo de lo dispuesto en los artículos 217 y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que «toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas». Este derecho fundamental, consagrado también en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 7.d), el Convenio n.º 1 de la Organización Internacional del Trabajo y reafirmado a su vez en la Carta Social Europea, implica que el tiempo de trabajo no puede disociarse del derecho al descanso, al cuidado ni al de una vida en plenitud que exige mayor libertad para ser vivida.

En el contexto español, la conquista de la jornada de 8 horas —formalizada mediante Real Decreto el 4 de abril de 1919, tras la histórica huelga de La Canadiense— situó a España en la vanguardia internacional de los derechos laborales. Posteriores avances normativos, como la Ley de Jornada Máxima de 1931 o la Ley de Relaciones Laborales de 1976, consolidaron este proceso. No obstante, desde la Ley 8/1983, de 29 de junio, que fijó la jornada máxima ordinaria en 40 horas semanales, han transcurrido más de cuatro décadas sin una reducción legal adicional, a pesar de los profundos cambios en la estructura productiva, los modelos familiares, el avance tecnológico y las transformaciones sociales.

Esta inmovilidad legislativa contrasta con la evolución de otros países europeos, como Francia, que desde el año 2000 mantiene una jornada semanal de 35 horas, o Alemania, donde la jornada media efectiva está muy por debajo de la española. La evidencia empírica nos demuestra que sociedades más avanzadas tienden a trabajar menos horas y distribuir mejor su tiempo, con beneficios visibles en bienestar, salud e igualdad.

Siguiendo esta senda, el pasado martes 6 de mayo, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley para la reducción de la



jornada ordinaria máxima a 37,5 horas semanales sin reducción salarial en cumplimiento del acuerdo de gobierno de coalición progresista y tras un proceso de diálogo social impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta reforma plantea un horizonte laboral más justo, saludable y corresponsable, al tiempo que responde a la necesidad de adaptar la legislación a una realidad en la que el vínculo directo entre horas trabajadas y productividad ha quedado obsoleto.

En efecto, los profundos cambios en los procesos productivos —marcados por la automatización, la digitalización y la expansión de la inteligencia artificial— han permitido generar mayor valor con menor carga horaria, sin que ello se haya traducido en un reparto más justo de los beneficios. Este desacople evidencia que la riqueza generada no se ha traducido necesariamente en una mejora sustancial del bienestar de las personas trabajadoras, sino en un reparto cada vez más desigual entre capital y trabajo.

Esta desigualdad tiene también una dimensión de género: la brecha en el uso del tiempo sigue siendo una de las expresiones más persistentes de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. Aunque el Estatuto de los Trabajadores contempla medidas de conciliación, su utilización sigue estando profundamente feminizada. Las excedencias, permisos no retribuidos y reducciones de jornada son asumidas de forma abrumadora por las mujeres, lo que perpetúa la desigualdad estructural y consolida la feminización de la pobreza. Una jornada laboral más corta, universal y que no penalice en términos económicos contribuiría decisivamente a una redistribución efectiva del trabajo de cuidados.

Por su parte, la salud laboral constituye otro argumento insoslayable. Todas las metodologías de evaluación de riesgos contemplan el tiempo de exposición como una variable crítica. Reducir la duración de la jornada disminuye la fatiga, el estrés y la siniestralidad, y mejora de forma directa la salud física y mental de las personas trabajadoras. A ello se suma la mejora de la conciliación personal, el aumento del tiempo disponible para la participación social, el ejercicio físico, la formación, el ocio, la cultura o el descanso. No se trata únicamente de proteger el derecho a cuidar, sino de afirmar el derecho al tiempo y a una vida plena. En esta línea, la futura ley incorpora avances complementarios imprescindibles como el reconocimiento efectivo del derecho a la desconexión digital y la implantación obligatoria de un registro horario digital, accesible y verificable. Estas medidas son fundamentales para combatir prácticas generalizadas, como los 2,7 millones de horas extra semanales no remuneradas en España, y para evitar que la reducción de jornada quede vaciada por la sobrecarga invisible del tiempo digital o el incumplimiento sistemático de los límites legales de jornada.

Asimismo, diversos estudios señalan el impacto positivo de la reducción de la jornada en términos medioambientales. Menores desplazamientos, horarios más escalonados y un modelo de consumo más sostenible se derivan de un rediseño del tiempo laboral que también sirve de palanca para una transición ecológica justa.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. La Junta General del Principado de Asturias expresa su firme respaldo a la tramitación y aprobación de la reforma legal actualmente en curso en las Cortes Generales orientada a establecer una jornada ordinaria máxima de 37 horas y media semanales sin merma retributiva, así como a garantizar su cumplimiento efectivo mediante medidas como el reconocimiento del derecho a la desconexión digital y la obligatoriedad de un registro horario digital accesible y verificable, en tanto que conjunto de acciones estructurales para el avance de los derechos laborales, la equidad de género, la salud colectiva, la sostenibilidad ambiental y la profundización democrática.

2. La Junta General del Principado de Asturias ratifica su compromiso con la transición progresiva hacia una jornada ordinaria de 32 horas semanales sin reducción salarial. En este



Junta General del Principado de Asturias

sentido, hace un llamamiento a los agentes sociales y económicos para iniciar un proceso de diálogo ambicioso y sostenido que permita alcanzar estos objetivos mediante la negociación colectiva, la innovación organizativa y el respaldo activo de las instituciones públicas.

3. La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a impulsar medidas de apoyo económico y asesoramiento técnico para aquellas pequeñas y medianas empresas que puedan tener dificultades en la transición con el objetivo de garantizar una implementación justa, equitativa y eficiente de la reducción de la jornada.

Palacio de la Junta, 15 de mayo de 2025. Javier González Vegas, portavoz.